La reconfiguración política de América Latina

Nayar López Castellanos*

RESUMEN

El texto explica la compleja reconfiguración política que vive América Latina en la última década, a partir de la cual se han desarrollado importantes modificaciones del Estado en torno a la democracia y la economía, destacando los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador. También se abordan los procesos de integración regional que tienden a una mayor independencia frente a la hegemonía estadounidense, así como la continuidad de Estados neoliberales en algunos países que enfrentan fuertes resistencias en el contexto de una grave crisis política y social. Se trata de explicar el presente latinoamericano y caribeño ante un conjunto de cambios, al parecer irreversibles, que plantean un escenario de verdadera justicia social, bajo la vigencia de una democracia participativa y el ejercicio pleno de la soberanía nacional.

PALABRAS CLAVE: América Latina, Estado, democracia, socialismo, integración, neoliberalismo, intervencionismo.

ABSTRACT

The text explains the complex political reconfiguration that Latin America in the last decade, from which important changes have been developed around the State of democracy and the economy, highlighting the cases of Venezuela, Bolivia and Ecuador. It also addresses regional integration processes that tend to be more independence from U.S. hegemony and the continuation of neo-liberal States in some countries faced strong resistance in the context of profound political and social crisis. It tries to explain the Latin American and Caribbean to present a set of changes, apparently irreversible, presenting a scene of true social justice, under the effect of a participatory democracy and the full exercise of nation sovereignty.

Keywords: Latin America, State, democracy, socialism, integration, neo-liberalism, interventionism.

* Doctor en Ciencia Política. Profesor investigador en la UACM y en la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

VEREDAS 20 • UAM-XOCHIMILCO • MÉXICO • 2010 • PÁGINAS 7-21

EL ESCENARIO REGIONAL

El proceso de formación y desarrollo de los Estados latinoamericanos ha estado ligado estrechamente a los intereses de las élites políticas y económicas. Las grandes mayorías han participado en las gestas históricas de su formación, pero no en las políticas estatales tendientes a una integración democrática. Así, identificamos en la región a un *Leviatán* de las minorías, a su servicio y bajo diferentes modelos políticos de subordinación de los pueblos, a partir de la democracia representativa.

La pregunta alrededor de la cual gira nuestra reflexión es acerca de los cambios que han tenido el Estado, la democracia y la política en América Latina y el Caribe durante la última década, sobre todo a partir del arribo de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela y la puesta en marcha de la llamada Revolución Bolivariana, en tanto ésta marca el inicio de gobiernos progresistas y revolucionarios de *izquierda*.

Este proceso se desenvuelve en el contexto del avance de algunos Estados neoliberales en la región, destacando México, Chile, Perú y Colombia, que han agravado la crisis económica y conducido al desastre social de los últimos 25 años, al mismo tiempo que las derechas dominantes imponen políticas cada vez más autoritarias frente a las protestas sociales.

Encontramos un escenario en el que se confrontan dos visiones políticas, con actores intermedios, en un periodo caracterizado por una de las crisis económicas más graves de los últimos tiempos a nivel mundial. Por un lado, la vía de la integración para el desarrollo de los pueblos a partir de un fortalecimiento del Estado, una mayor participación de los movimientos sociales y el ejercicio de la capacidad soberana de la nación en la arena internacional. Por el otro, se trata del sostenimiento de las políticas neoliberales en beneficio de los grandes capitales trasnacionales y de las oligarquías *locales*.

Por su parte, la democracia en la región también atraviesa por una etapa de reacomodo de los mecanismos políticos de representación y acceso al poder, en el que se expresan dos estrategias: un sector que impulsa la ampliación de la democracia hacia un modelo participativo, y otro que se empeña en mantener el sistema tradicional, el representativo, pese a un creciente descrédito social que se refleja, fundamentalmente, en altos niveles de abstencionismo

y cuestionamientos al sistema de partidos políticos y a las instituciones mismas.

La política, definida en sus sentidos clásicos, parece haber perdido su lugar preeminente en la determinación de los asuntos públicos que pueden ser organizados de un modo o de otro sobre la base de la voluntad y la razón. La política espectáculo, cuyos actores básicos son los medios de comunicación de masas, y la política reducida a los procesos electorales que hacen desplazar a la democracia de una forma de gobernar a un modo de legitimar, han hecho declinar la figura del ciudadano como sujeto activo y autónomo que racionalmente escoge entre diversas opciones posibles el camino a seguir (Ávalos, 2002:77).

En este contexto, el intervencionismo estadounidense en la región pareciera estar todavía inspirado por el Destino Manifiesto y la Doctrina Monroe. Por ello señalamos que esta política injerencista no ha cambiado de contenido, sino de presentación. Ejemplo reciente es el golpe de Estado en Honduras, frente al cual, a pesar de las declaraciones de Obama, se actuó con inteligente complicidad manteniendo el reconocimiento constitucional del presidente Zelaya, sin presionar el retorno de la legitimidad democrática frente a los golpistas. Una vez más, se recurre a los métodos de las viejas dictaduras militares en la región latinoamericana y caribeña porque no hay golpe de Estado que tenga éxito sin su aprobación en Washington.

Transformaciones del Estado desde la izquierda

En la actualidad, tenemos tres casos paradigmáticos de reconfiguración del Estado en América Latina: los procesos constituyentes en Venezuela, Bolivia y Ecuador, el primero en 1999, y los otros dos en 2008.

Las asambleas constituyentes, determinadas mediante elecciones democráticas, y dominadas por amplias mayorías de izquierdas en los tres países, a pesar de la beligerancia de las fuerzas de derecha, modificaron sustancialmente la estructura política, económica, social y cultural, sobre todo con respecto a la ampliación de los derechos políticos de la ciudadanía, y de un nuevo protagonismo del Estado en la economía.

El rasgo más relevante es que se rescata no sólo el papel rector del Estado en los asuntos económicos, de inspiración socialista, sino que se establecen mecanismos de participación popular, como el referéndum y la revocación del mandato, que transforman de manera importante el carácter y alcance de la democracia, superando el nivel limitado y formal del sistema de representación de partidos, en la perspectiva de consolidar un modelo de democracia participativa que podemos ubicar como aquella que contempla no sólo el voto ciudadano para elegir a representantes legislativos y gobernantes en todos los niveles, sino que abarca esta capacidad para definir aspectos relevantes en torno al ejercicio mismo del poder, involucrando a la población en las grandes decisiones públicas (Nun, 2001; Oliver, 2001; Roitman, 2007).

También se introducen nuevos parámetros del Estado de alto contenido social, incluso superior al que llegó a tener en sus mejores momentos el Estado nacional desarrollista. No sólo se restituyen las responsabilidades sociales que han sido diminuidas sustancialmente en la etapa neoliberal, sino que se incrementan y se amplían derechos universales antes no reconocidos. La lógica de la capacidad económica estatal se orienta hacia las necesidades sociales. En Venezuela, el mejor ejemplo radica en las llamadas *Misiones Bolivarianas*, financiadas básicamente por las ganancias de la producción petrolera, y orientadas a elevar la calidad de vida de la población más pobre.

La voluntad política de transferir parte del ingreso petrolero a la generación de la economía social se ha traducido en una serie de iniciativas para el desarrollo de una economía que construye su camino con una lógica distinta a la del capitalismo neoliberal. De ese esfuerzo son parte: las empresas de propiedad social, las empresas familiares, las empresas cooperativas, las empresas autogestionarias, las microempresas y los fundos zamoranos. La recuperación de fábricas quebradas por el neoliberalismo y su pase al control obrero es un signo inequívoco del espíritu de la Revolución (Figueroa, 2009:141).

Así, la reivindicación económica del Estado se traduce en la reapropiación de la explotación de los recursos naturales estratégicos, privatizados durante el neoliberalismo, el fin de la política del endeudamiento externo y la creación de espacios económicos de carácter socialista y cooperativo.

De igual forma, destaca la diversificación de la producción para la exportación y la creación de empresas estatales con naciones de otras regiones del mundo en condiciones económicas similares. Por ejemplo, la creación de una fábrica de tractores con capital estatal venezolano-iraní, como parte de una alianza económica, redundará en la capacidad agrícola tendiente a una autosuficiencia alimentaria. También existe la producción de celulares en una empresa venezolana-china, para su venta a muy bajo costo, promoviendo la participación popular en el creciente mercado de las tecnologías de punta en el ámbito internacional.

Se trata de que el Estado retome un papel central en la economía a partir del precepto de garantizar los recursos tanto para el desarrollo social como para el fortalecimiento nacional en un periodo en el que las condiciones económicas se definen entre la tendencia hacia los polos regionales que puedan hacer frente a la hegemonía de los monopolios trasnacionales en manos de las grandes potencias, y la continuidad de un control económico unipolar.

Sin embargo, este conjunto de transformaciones aún no ha logrado modificar la lógica del desarrollo capitalista, a pesar de que existen avances importantes. El Estado venezolano, por ejemplo, contempla el impulso de diferentes formas de producción que eliminan la plusvalía, aunque se mantiene el *derecho* a esa enajenación del trabajo por la vía de las empresas capitalistas. Se trata de un complejo proceso de transición que, aun bajo esta estructura *contradictoria*, cuenta con posibilidades promisorias de terminar con la explotación del hombre por el hombre.

Otro avance sustancial en esta reconfiguración del Estado, tiene que ver con el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas en Bolivia, política inédita en este país andino si se toma en cuenta el racismo estructural que ha marcado la relación entre Estado y pueblos indígenas desde la conquista y la colonización españolas. Hoy, el Estado Plurinacional de Bolivia reconoce no sólo la capacidad autonómica de los pueblos indígenas sino el derecho constitucional a ejercer y practicar su autogobierno y su cultura.

El primer eje de la Constitución es el reconocimiento del carácter plurinacional de la formación social boliviana y, por tanto, del Estado de clase que se pretende construir. Con eso se deja atrás la naturaleza monocultural y monocivilizatoria de la estatalidad boliviana asentada a

partir de la fundación de la república (1825) y se reconoce la existencia de 34 naciones originarias y sus respectivas lenguas, formas de organización política, social, jurídica y económica (Moldiz, 2009:202-203).

Esta reforma, sin duda, es un acto de justicia con la historia, con las civilizaciones que fueron desmanteladas y sometidas a la dominación durante 500 años. Pero también es el resultado de una resistencia indígena que supo mantener y desarrollar su identidad para hacerse respetar. Bolivia ya no será la misma, ni tampoco América Latina, porque este importante reconocimiento resulta fundamental frente al conjunto de retos que todavía presenta la región en tanto espacio multinacional y multicultural.

¿Una nueva democracia?

Las refundaciones constitucionales que se han dado en Venezuela, Bolivia y Ecuador en torno a la estructura política del Estado y el carácter de la democracia, son de vital importancia para el cambio político que vive la región. La introducción de mecanismos de participación popular como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, la revocación del mandato y el presupuesto participativo, conforman principios básicos de una democracia participativa.

Este cambio busca una mayor conciencia social en torno a los asuntos públicos y una ciudadanía más protagonista de su propio destino, además de resarcir una deuda histórica relacionada con el carácter elitista de la participación política. Por ejemplo, resulta importante recordar que las mujeres tuvieron derecho al voto hasta 1950, en promedio, y que en el siglo XIX, durante el Estado oligárquico, los indígenas, los campesinos, los negros y los analfabetas, tampoco podían sufragar; de hecho, en la mayoría de los países latinoamericanos sólo votaba entre el 2 y el 4% de los hombres pertenecientes a las élites (Stanley y Stein, 1971).

En el proceso actual, se supera el limitado ejercicio del voto que significa la democracia representativa, por mecanismos que otorgan mayor capacidad a la sociedad para hacer valer su opinión en asuntos centrales de la nación. Se trata de construir una verdadera participación popular, recuperando el sentido de la democracia, esto es, el gobierno del pueblo.

Para alcanzar mayor solidez de la democracia protagónica revolucionaria se hace necesario restituir a la política su carácter público, participativo, ético y solidario, cuyo principal sentido es la constitución de la ciudadanía, los espacios de civilidad, las instituciones y una cultura política democrática, basada en una elevada conciencia social ética y en una activa y consciente participación ciudadana. Se trata de rescatar la política como mediación para la vida humana vital, a través de su sentido de solidaridad y de la búsqueda del bien común (Gobierno Bolivariano de Venezuela, 2009:37).

Al mismo tiempo, se produce una democratización del acceso a la información pública y los medios de comunicación masiva, en el ámbito radioeléctrico, para otorgar mayores espacios a quienes históricamente no han tenido voz. Lejos de limitar la libertad de expresión, se ha hecho precisamente lo contrario: romper los monopolios que controlan prácticamente todos los medios para que sectores otrora subalternos de la sociedad puedan ejercer el mismo derecho.

Las modificaciones al sistema político y la estructura de la democracia en Venezuela, Bolivia y Ecuador no sólo implican una reconfiguración de los derechos políticos de sus pueblos, sino que introducen una nueva concepción sobre los mecanismos de participación política en la región. Además de los parámetros institucionales que se desprenden del Estado, también van tomando fuerza en otros países latinoamericanos experiencias reivindicatorias y autonómicas desde abajo; esto es, el poder político traspasa las instancias formales, y se ejerce por la vía de los hechos, de forma paralela y sin pedir permiso, aunque en algunos casos existen puentes de comunicación y entendimiento.

Como ejemplos de ello está la experiencia del Movimiento de los Sin Tierra (MST) en Brasil, las Juntas de Buen Gobierno en territorio zapatista mexicano, en su momento el movimiento de las asambleas barriales en Argentina, así como diversas experiencias de carácter más local. En estos casos se practica el autogobierno, ante la negativa del Estado a reconocer sus derechos políticos, bajo una concepción colectiva, solidaria y, como en el caso del MST, socialista.

Los movimientos sociales y los espacios organizados a partir de la sociedad civil, sobre todo los llamados organismos no gubernamentales (ONG), han adquirido un protagonismo en los procesos políticos nacionales, pasando de un ámbito reducido de carácter localista y

demandas específicas, a un plano más integral y de alcance regional y nacional. Ello se ha reflejado en su incorporación al debate de los principales temas nacionales, sobre todo en su oposición a las políticas neoliberales y privatizadoras de los recursos naturales; este es el caso de las guerras del gas y del agua en Bolivia, y la defensa de las comunidades indígenas y campesinas frente al Proyecto Mesoamérica (antes Plan Puebla Panamá), entre otros.

La transición hacia la democracia participativa está en marcha en América Latina y el Caribe, ampliando los derechos políticos de sectores populares, y creando una ciudadanía cada vez más consciente y activa en el debate sobre los asuntos públicos y las alternativas para resolver las problemáticas nacionales, pero, sobre todo, estableciendo los mecanismos que multipliquen la conciencia política para que se constituya en un patrimonio social.

IMPACTO DE LA INTEGRACIÓN REGIONAL

La reconfiguración latinoamericana y caribeña se expresa también en los diferentes procesos de integración económica, política, social y cultural que se desarrollan en los países de la región.

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), el renovado Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), además de proyectos más específicos como el Banco del Sur, Telesur, Petrosur y Petrocaribe, entre otros, representan un giro radical tanto en el desempeño de las relaciones regionales, como en torno a la hegemonía que históricamente ha impuesto Washington.

Frente al Estado, este proceso de integración tiene un impacto similar ya que se comparten intereses y se adquieren mayores compromisos en el terreno económico, político, social y hasta militar. Se trata de estructuras regionales que abarcan políticas económicas de gran relevancia como la exportación de recursos naturales, la prioridad del intercambio entre los países miembros, el apoyo estatal al desarrollo social, la integración cultural que se sustrae a la lógica mercantil y el flujo de la información.

La Alba, a la que están integrados Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Antigua y Barbuda, República Dominica, San Vicente y las Granadinas, Honduras (ahora viviendo bajo un gobierno golpista)

y Ecuador, contempla, por ejemplo, un intenso programa de intercambio de materias primas y recursos naturales para asegurar en los países los insumos básicos para el funcionamiento de la economía. Cuba recibe energéticos de Venezuela a cambio de la presencia y labor gratuita de miles de médicos, técnicos deportistas y trabajadores sociales. Bolivia paga ese mismo petróleo con productos agrícolas. Los países caribeños –miembros de esa alianza– obtienen el petróleo a precios preferenciales, con intereses menores a los establecidos en el mercado mundial y mayores plazos para pagar. También existe una integración en políticas sociales y culturales. Sin duda, la ALBA recuerda el Acuerdo de Ayuda Mutua Económica (CAME), que integraba a los países socialistas de la época soviética.

La constitución de la ALBA ha sido una importante iniciativa en los últimos años. Esta asociación surgió inicialmente con el intercambio que desarrollaron Venezuela y Cuba, pero estimuló posteriormente el surgimiento de nuevos criterios cooperativos para regular las relaciones económicas entre los países. Promueve sustituir los principios de competencia y libre comercio por normas de complementación y solidaridad. Siguiendo estas reglas, Venezuela envía petróleo a Cuba a cambio de actividades educativas y sanitarias, que no se remuneran por los precios vigentes en el mercado internacional (Katz, 2008:153-154).

El Mercosur es un acuerdo de carácter económico y comercial, con las pautas del libre mercado, pero con miras a una integración político-económica, ante lo cual ya existe un Parlamento regional que incluye a sus cuatro miembros (Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina), además de una próxima moneda común y el libre tránsito en las fronteras, elementos que están transformando al Estado; se trata de un proceso similar al que originó a la Unión Europea.

La Unasur, integrada por los 12 países suramericanos, destaca sobre todo por su alcance político al constituir el espacio más avanzado de coordinación sin la presencia de Washington. No es una tribuna regional en construcción con miras a una mayor ampliación, sino que de ella se han derivado acuerdos trascendentes, como la creación del Consejo Suramericano de Defensa, una alianza militar ajena al control de Estados Unidos, histórica por sí misma.

Esta política integracionista va acompañada de un crecimiento del intercambio con naciones de similar condición económica ubicadas en otras regiones del mundo, como Irán, India, Libia y

China. Estas relaciones han dado un mayor impulso al desarrollo económico de los países latinoamericanos ante la conveniencia de los acuerdos frente a las condiciones desiguales que imponen las grandes potencias.

LOS GOBIERNOS NEOLIBERALES, POR LA RUTA DEL CAOS

Ubicado por Perry Anderson (1995) como la etapa más salvaje del sistema capitalista, el neoliberalismo se caracteriza por la privatización de las empresas estatales, la disminución o desaparición de las responsabilidades sociales, el sometimiento absoluto a las leyes del mercado capitalista y la apertura indiscriminada de las fronteras para el beneficio de las grandes trasnacionales.

Frente a las transformaciones que vive la mayor parte de la región, se encuentran los gobiernos de derecha inmersos en el modelo neoliberal, destacando los de México, Colombia, Perú y Chile, que continúan con la enajenación de la soberanía a las políticas de Estados Unidos. En estas naciones, el Estado ha renunciado a todas sus obligaciones sociales para convertirse en una eficiente maquinaria represiva que garantice la estabilidad política y la trasnacionalización de la economía en beneficio del capital. La ruta que están siguiendo se encuentra muy lejos de la visión integradora del resto de los países latinoamericanos y caribeños y, por el contrario, continúan priorizando la estrategia de libre comercio y la incondicionalidad política bajo el control de Estados Unidos. Tal orientación resulta paradójica, pues precisamente México, con un gobierno que aplica fielmente las políticas neoliberales, es el que tuvo el menor crecimiento económico de la región durante 2009, convertido en un apéndice de la economía estadounidense y manteniendo la dependencia completa de los préstamos financieros internacionales.

Así, los *ortodoxos neoliberales* mantienen las políticas del modelo que ocasionó un cataclismo social en las naciones latinoamericanas, recuérdense los estallidos en Argentina (2001) y Bolivia (2003), y que, con todas sus variantes, fue derrotado en las urnas, dando paso a los liderazgos que impulsan las transformaciones más profundas, como los de Venezuela, Bolivia y Ecuador, y los de menor

alcance, como Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Nicaragua y El Salvador.

Resulta probable que la continuidad neoliberal genere mayores tensiones sociales en estos países, con lo cual la propia estabilidad política que las clases dominantes han mantenido con el uso de la fuerza, incluyendo la militarización, la criminalización de los movimientos sociales y el apoyo incondicional de los medios de comunicación masiva, pueda derivar en un conflicto social de alcances inimaginables, sobre todo cuando pensamos en el caso de México, en el que al descontento generalizado por la crisis económica, se añade la existencia de grupos armados. El panorama es más complejo cuando se suma el paulatino cierre de los espacios políticos y la creciente pobreza. Por ello, México resulta representativo de lo que también sucede en Colombia y Perú: regímenes autoritarios con políticas económicas neoliberales, amparados en la legitimidad de una democracia tutelada.

Lo que avizoramos para México es un nuevo modelo autoritario de seguridad. Un *Stato Nuovo* plutocrático-mafioso-bantustanizado, de corte cada vez más policial-militar, basado en prácticas de tipo contrainsurgente. Como hipótesis aventuramos que al nuevo Estado le corresponde un nuevo modelo de fuerzas armadas, formales e informales, así como un aparato de (in)justicia correspondiente. Hipotetizamos, también, que transitamos hacia un nuevo "Estado de excepción", que con la excusa de combatir a los cárteles, las mafias y la subversión, esté dirigido a controlar, criminalizar y/o aplastar a los movimientos sociales y a la disidencia política interna, resucitando, de paso, con otro nombre, el viejo delito de "disolución social" del diazordacismo y que podrá recurrir a corto o mediano plazo a figuras como la ley marcial u otras similares (Fazio, 2009:118).

Por su lado, las oligarquías latinoamericanas desplazadas de los gobiernos nacionales también se manejan desde la lógica neoliberal y la sumisión a Estados Unidos, dispuestas a cualquier acción, incluso violenta, para modificar el rumbo de los cambios, tal y como se puede constatar con el golpe de Estado en Honduras, que depuso al presidente Zelaya, de origen liberal, por el enorme *pecado*, o *atrevimiento*, de haber incorporado a su país a la ALBA, y tener relaciones de cooperación con Cuba y Venezuela.

Pensando una ¿nueva? América Latina

A pesar de la conflictividad social y política existente, originada por la ofensiva oligárquica que planifica magnicidios, manipula medios de comunicación en contra de la democracia y provoca golpes de Estado, América Latina y el Caribe está viviendo una nueva época que difícilmente podrá ser revertida ante la profundidad alcanzada por las transformaciones sociales, económicas y políticas.

La *nueva* América Latina, con todas sus diversidades, presenta una generación de liderazgos políticos más auténticos, emanados de los avatares de las luchas sociales y democráticas. Éstos representan una nueva tendencia regional a partir de la consolidación de conceptos como soberanía, independencia, autonomía y, en algunos casos, socialismo.

Ahora, en América Latina un ex obrero metalúrgico gobierna en la décima economía industrial del mundo, un indígena y líder cocalero lo hace en una nación secuestrada históricamente por oligarquías racistas, un economista de tendencias socialistas lo hace en un país de complejo desarrollo político, un ex militar impulsa una transformación estructural con miras a edificar un nuevo tipo de socialismo en una potencia petrolera, un obispo de la teología de la liberación en un país que apenas termina de salir de la cultura dictatorial.

El éxito, la multiplicación y el fortalecimiento de estas experiencias de gobierno dependen del alcance de las transformaciones políticas y económicas, de la unidad y la profundidad de la integración hacia el desarrollo social, y de la capacidad de los liderazgos para sostener la emergente democracia participativa en sus naciones, así como el verdadero compromiso popular de los gobiernos traducido no sólo a partir de las políticas sociales sino de una real participación de los pueblos en los asuntos públicos.

El Estado, la democracia y la política en América Latina y el Caribe, han tenido importantes reconfiguraciones en la década que termina, pues nunca la región había tenido más gobiernos de izquierda que ahora, y menos buscando construir un nuevo tipo de socialismo.

La década que va de 2000 a 2009 está siendo de grandes transformaciones políticas, sociales y culturales en toda la región de América Latina.

Los movimientos sociales y las luchas ciudadanas han cuestionado la agenda política de la gobernabilidad y el ajuste estructural, imperante en los años del dominio del neoliberalismo, y la están sustituyendo por otra de democracia participativa autónoma, recuperación de lo público por la sociedad, el derecho a la sobrevivencia nacional e individual, la soberanía alimentaria, la economía solidaria y la soberanía internacional. En el fondo estamos ante la presencia a nivel regional de nuevas fuerzas históricas cargadas de referentes políticos, culturales, morales e ideológicos alternativos (Oliver, 2009:140).

Sin embargo, el panorama es complejo. Las oligarquías se resisten con fuerza a los cambios en proceso porque no están dispuestas a perder el monopolio del poder. Por ello, los golpes de Estado protagonizados en Venezuela, en el 2002, contra Hugo Chávez, y en Honduras, en el 2009, contra Manuel Zelaya; los intentos de magnicidio contra Hugo Chávez y Evo Morales; la continuidad, bajo Obama, de la agresión económica y política contra la Revolución Cubana; así como las constantes ofensivas a través de los medios de comunicación contra todos los proyectos alternativos al modelo neoliberal y al *status quo*.

Los otros dos grandes desafíos están relacionados con la formas de impedir el intervencionismo estadounidense y superar la actual crisis económica mundial. Con respecto al primer caso, las naciones latinoamericanas y caribeñas tendrán que acrecentar su alianza política regional desde la perspectiva de consolidar su fuerza y lograr la ruptura de la hegemonía estadounidense. Pero esa alianza no tendrá éxito si no se amplía la integración económica, tomando en cuenta que la principal debilidad que puede tener Estados Unidos se encuentra precisamente en este ámbito. El intervencionismo de Washington siempre ha buscado controlar los mercados latinoamericanos y caribeños, y mantener una presencia militar en la perspectiva geopolítica mundial, tal y como sucede con las nuevas bases militares instaladas en Colombia, por lo que una mayor integración económica latinoamericana, que redunde en su fortalecimiento, y el crecimiento de las relaciones con otras naciones subdesarrolladas, puede garantizar el avance de nuevos modelos de desarrollo y de sociedad en la región.

Con respecto a la crisis económica, tendrá mayor viabilidad la tendencia integracionista si se alcanza una mejor capacidad industrial, una diversificación de las producciones nacionales, una elevación del nivel de vida de las sociedades y la utilización inteligente de los recursos que están recibiendo los Estados latinoamericanos en esta nueva etapa.

Esta es la América Latina de hoy, una región bajo un intenso proceso de transformación política y económica que, a pesar de la oposición de las oligarquías y los gobiernos incondicionales al imperio, se encuentra en el camino de fortalecer opciones propias que le deparen un futuro mejor. Es la América Latina que trabaja por ese otro mundo posible.

BIBLIOGRAFÍA

- Anderson, Perry (1995), "Balance del neoliberalismo", en Sader, Emir, (org), *Pós-neoliberalismo as políticas sociais e o Estado democrático*, Paz e Terra, Sao Paulo.
- Ávalos, Gerardo (coord.) (2002), *Redefinir lo político*, UAM-Xochimilco, México, p. 313.
- Fazio, Carlos (2009), "México ¿Hacia un Estado de excepción?", en López Castellanos, Nayar y Oliver, Lucio (coord.), *América Latina y el Caribe, una región en conflicto. Intervencionismo externo, crisis de las instituciones políticas y nuevos movimientos sociales*, UNAM/Plaza y Valdés, México.
- Figueroa, Amílcar (2009), "¿Reforma o revolución en América Latina? El proceso venezolano", en Rodas, Germán, (coord.), *América Latina hoy, ¿Reforma o revolución?*, Ocean Sur, México.
- Gobierno Bolivariano de Venezuela (2009), *Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación* 2007-2013, Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Venezuela.
- Katz, Claudio (2008), El rediseño de América Latina. ALCA, Mercosur y ALBA, Editorial Ciencias Sociales, La Habana.
- López Castellanos, Nayar y Oliver, Lucio (coord.) (2009), *América Latina* y el Caribe, una región en conflicto. Intervencionismo externo, crisis de las instituciones políticas y nuevos movimientos sociales, UNAM/Plaza y Valdés, México.
- Moldiz, Hugo (2009), "¿Reforma o revolución en América Latina? El proceso boliviano", en Rodas, Germán (coord.), *América Latina hoy, ¿Reforma o revolución?*, Ocean Sur, México.
- Nun, José (2001). *Democracia ¿Gobierno del pueblo o gobierno de los políticos?*, FCE, Buenos Aires.
- Oliver, Lucio (2009). El Estado ampliado en Brasil y México, UNAM, México.

La reconfiguración política de América Latina

- Oliver, Lucio (2001), "América Latina: entre la gobernabilidad, la democracia y la nueva sociedad civil", *Dialéctica*, nueva época, año 25, número 33-34, UAP, México.
- Roitman, Marcos (2007), *Democracia sin demócratas y otras invenciones*, Sequitur, España.
- Stanley, J. y Stein, Barbara (1971), *La herencia colonial en América Latina*, Siglo XXI Editores, México.